



Revista de **DERECHO PROCESAL**

Nº 21

Universidad de Chile
Departamento de
Derecho Procesal
Facultad de Derecho

El Anteproyecto de Código Procesal Civil

El Proceso Civil Español como Modelo Procesal de Oralidad

José Bonet Navarro

Profesor Titular de Derecho Procesal (Universitat de València, España)

Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia

SUMARIO:

- I. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL.
- II. LA INCORPORACIÓN DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL.
- III. ORALIDAD GENERAL Y EXCEPCIONES EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS CIVILES:
 1. Juicio comunes.
 2. Procedimientos comunes con especialidades.
 3. Procedimientos especiales.
 4. Otros procedimientos.
- IV. ALGUNAS GARANTÍAS DE LA ORALIDAD: DIRECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DEBATES:
 1. La dirección de los debates.
 2. Documentación de las actuaciones.
- V. ALGÚN ASPECTO COMPLEMENTARIO A LA ORALIDAD: EL USO DE LA LENGUA OFICIAL Y POSIBILIDAD DE INTÉRPRETES.
- VI. EXCEPCIONES A LA ORALIDAD EN LA CELEBRACIÓN DE VISTAS Y COMPARECENCIAS:
 1. Vista a puerta cerrada.
 2. Aplazamiento de los señalamientos.
 3. Suspensión de las vistas.
 4. Interrupción de las vistas.
 5. Repetición de las vistas.
- VII. EXCEPCIONES A LA ORALIDAD EN LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA:
 1. Prueba anticipada.
 2. Declaración por Administración Pública.
 3. Reconocimiento y auxilio judicial.
 4. Diligencias finales.
- VIII. A NOMBRE DE CONCLUSIÓN.

RESUMEN: Partiendo de un posicionamiento de la situación prevaleciente a la entrada en vigor de la LEC 1-2000, de unas consideraciones sobre las ventajas y desventajas tanto de la oralidad como de la escritura, así como de la relativa exigencia constitucional de su imposición, se analiza el alcance de los preceptos que impone en materia de *imedación, concentración y publicidad* en el procedimiento ordinario, señal, en los contenidos, sus *especialidades, especiales y hasta en medida, incidentes y mecanismos*, que *permítan la flexibilidad* para ciertos supuestos en atención a *diversas necesidades*. Se concluye posicionando de manifiesto que resulta *positivo el señalar entre las ventajas e inconvenientes que plantea la oralidad*, de modo que *se hace necesario afrontar en un futuro no lejano su incorporación* en una *necesaria reforma del proceso civil chileno*.

PALABRAS CLAVE: Proceso civil, procedimiento, oralidad, imedación, concentración.

L. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL

La denegada Ley de Ejercicio Civil de 1881 y, en general, el ordenamiento procesal civil español se había caracterizado hasta la entrada en vigor de la LEC 1-2000, en su opinión, principalmente por tres caracteres:

En primer lugar por su longevidad. La anterior LEC es de 1881, de modo que cuando fue denegada contaba ya con más de 120 años de aplicación. Y todavía más si atendemos a que contemplaba buena parte de la regulación de la anterior LEC de 1855; y ésta, a su vez, ya había incorporado a su vez normas anteriores. Lo bien cierto es que, sin perjuicio de las múltiples reformas puntuales que sufrió, se trataba de una regulación idónea para la realidad democrática existente cuando entró en vigor, pero obsoleta para una sociedad moderna en los albores del Siglo XXI.

En segundo lugar, por la disparidad de procedimientos. Hasta el punto que se producía un fenómeno que se viene a denominar como de "jurisdicción de procedimientos". A los cuatro procedimientos ordinarios (mayor y menor cuantía, cognición y verbal), se sumaban otros muchos contenidos en cualquier ley material, pues no evitaban incluir particularidades procesales junto a cada regulación material. Así por ejemplo, el juicio de desahucio regulado en la Ley de Amortamientos Urbanos y Ley de Amortamientos Rústicos; o las previsiones contenidas en la Ley de competencia deslocal, Ley Cambiaria y del Cheque, etc. En fin, prácticamente toda ley material introducía preceptos de carácter procesal que no siempre resultaban necesarios atendidas las necesidades que surgían de las relaciones jurídicas materiales. De ese modo, lo especial se convirtió en la práctica en lo ordinario.

Y en tercer lugar por la escritura. Aunque en los procedimientos había también algún acto oral, con sus visitas y audiencias, los procedimientos eran escritos sobre todo porque no regía la imedación ni, por ende, la concentración, ni publicidad real.

Sin duda la escritura aportaba ventajas. Para los abogados y para el juzgado resultaba más sencilla y cómodo preparar sus alegaciones o resoluciones en los tiempos que la transmisión escrita permitía. En los períodos en que se dilataba el procedimiento era posible preparar mejor las actuaciones y hasta en ocasiones facilitaba cumplir posibles fálos de preparación o experiencia. Sin embargo, la calidad en la justicia se veía resentida no solamente en las propias dilaciones que suñan los procedimientos sino incluso en las menores garantías de certeza que en relación con otro oral ofrecían los eventuales cambios en la persona del juzgador respecto del juzgado, de modo que, por último, la censura en la valoración de la prueba se resentía.

Y es que en efecto, un procedimiento caracterizado por la oralidad tendrá indudable ventaja respecto de otro escrito precisamente en las consecuencias implícitas, esto es, como consecuencia directa de la imedación, concentración y publicidad.

Sacado la misma persona la que participe directamente en la práctica de prueba y la que juzgue mejorará la valoración de la prueba, puesto que, entre otras cosas, de ese modo podrán atenderse aspectos, como por ejemplo el tono de voz o los gestos del declarante, que de otro modo pasarían inadvertidos. Parece claro que escuchar la declaración de una parte permite una mejor valoración que la fría lectura de esa misma declaración en un tono donde las preguntas, repreguntas y respuestas se encuentran en folios revueltos. Asimismo, si las visitas y audiencias incorporan la mayor parte de las actuaciones y se celebran en las sesiones estrictamente necesarias y lo más cercanas posibles en el tiempo se favorece igualmente una decisión de mayor calidad en cuanto a la celeridad. Y, por último, el acceso directo del público en condiciones de razonable comprensión de lo que acontece, favorece la parte paciencia ciudadana en la actividad jurisdiccional, por ende su transparencia y hasta un efectivo control social de dicha actividad.

No es de extrañar ante ello que la Constitución española se refiera a un proceso "escrito" (art. 24.2 CE) y sobre todo, a que "el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal" (art. 120.2 CE). Lo que se refiere en otros preceptos que la desarrollan como el art. 229 LOPJ cuando literalmente dispone literalmente que "los asuntos judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su adecuación oral"; a lo que matiza igualmente que "las diligencias, confesiones en juzgado, testimoniales, carros, exploraciones, informes, ratificación de los peritajes y visitas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal, con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en Juicio Público, sobre lo dispuesto en la Ley".

Los últimos no son estrictamente temporales. Se utilizan palabras como "predominantemente" y se limita a que la oralidad lo será "sobre todo", no en cambio se exige que la oralidad rija "necesariamente" o "en todo caso". Precisamente por ello no cabe repetir como inconstitucionales los procedimientos escritos que tras la CE, salvo el proceso penal y en cierta medida el laboral⁴⁰, han sido en algunos casos (proceso civil III) y siguen siendo en otros (proceso administrativo) características del derecho procesal español tras más de 20 años de CE. Y es que, en efecto, el proceso civil ha sido escrito tras 22 años de vigencia de la CE, concretamente hasta que entró en vigor la LEC 1-2000 el 8 de enero de 2001. Y, por su parte, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la "jurisdicción contencioso-administrativa", mantiene todavía hoy un procedimiento totalmente escrito, con la sola excepción del procedimiento abreviado regulado íntegramente en el art. 78 LJCA para determinadas materias sencillas o de cuestión limitada.

La oralidad, con todo, es exigente. Impone estrictos presupuestarios y personales. Es necesario contar con espacios físicos debidamente habilitados para que el acto oral se celebre en debidas condiciones de operatividad y dignidad, de modo que tanto el juez, el secretario judicial, las partes con sus letrados y procuradores puedan desarrollar sus correspondientes actividades orales, así como también el público pueda estar presente en dichas actuaciones. Ademas, en cuanto implica una garantía de la oralidad y favorece la valoración judicial y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, sobre todo en orden a la formulación de recursos, impone igualmente contar con medios tecnológicos

⁴⁰ Así y todo, no cabe pasarse por alto que la LLE 10/94 ya introdujo reformas que tendían a la oralidad. Así, el art. 311.11 (1993), seguidamente dictado por el 34/94, reconoció el principio de publicidad para las diligencias de prueba, así como los trámites y demás negocios judiciales. Por su parte, art. 60 de la LLE, el 29/98, reguló el art. 1999, del 7 de abril de 1995 que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dejando claro que figura "los principios de imedación, oralidad, concentración y celeridad" (art. 74.1 PL).

que, debidamente mantenidos, permitan la grabación del sonido y de la imagen de las correspondientes visitas y audiencias.

De este lado, la oralidad lleva implícita que se planteen cuestiones que exijan respuestas inmediatas, sin los tiempos de preparación que implican y permiten los actos escritos. Y ante ello se hace necesaria una mayor formación general, capacidad de respuesta inmediata y, sobre todo, una intensa preparación previa de todos y cada uno de los asuntos concretos que van a conocerse tanto por los profesionales que representan y asisten a las partes, como por los juegadores que han de dirigir los debates⁶².

Possiblemente estas exigencias, con los inconvenientes y esfuerzos que traen consigo, han estado en el sustento de la tardía adecuación del procedimiento civil al mundo-directriz constitucional sobre la oralidad contenido en el citado art. 1202 CE. Sin embargo, parece obvio que estos inconvenientes habían de terminar codiciendo ante las evidentes ventajas de los procedimientos orales tanto en celeridad como sobre todo en calidad de la función jurisdiccional.

II. LA INCARPORACIÓN DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL

La LEC vigente no contiene manifestaciones teóricas sobre la vigencia de una genérica oralidad. En realidad, no son necesarios preceptos en los que se diga que rige. Lo que hace la LEC, por el contrario, sencillamente es introducir normas en las que de forma rotunda y terminante imponen que el proceso civil se desarrolle caracterizado por la oralidad, esto es, no solamente con predominancia de actos en los que la palabra sea el medio principal de comunicación sino en los que rija la inmediación, la concentración y la publicidad real⁶³.

Por lo que se refiere a la inmediación, ha de destacarse el art. 137 LEC que tras imponer la presencia judicial en todas las declaraciones, pruebas y visitas, sanciona su infracción con la nulidad de pleno derecho. Lo que se completa por el art. 194 LEC, según el cual el asunto se fallaría "por el Juez o por los Magistrados que fueron asistidos a la visita o juicio, aunque después de ésta hubieren dejado aquéllos de ejercer sus funciones en el tribunal que conozca del asunto".

62 Con términos similares vienen a ponerlo de manifiesto, entre otros, LOPEZ-IRABOGLI, Tomás, y REVERBON PALAZUELOS, Benito, "Artículos 451 a 456. Juicio ordinario y sentencia", en *Proceso Civil práctico*, V, salvo citarlos; MORENO GIL, La Ley-Accidentalidad, Madrid, 2006, p. 74, cuando dice que "los operadores procesales tendrán que combinar de hábitos y estrategias"; ALMENDRO ARENAL, I., "Nueva Ley, nueva Aburguesa", en Consideraciones prácticas sobre Derecho, Justicia y Ley de Enjuiciamiento Civil, tom.o dos, CIDE, Valencia, 2004, pp. 35-36, es grato de aludir que "esta oralidad... nos exige una rotura y una capacidad de comunicación fluida"; cf. en fin, SOTO SERRA, Eduardo, El litigio de partes y el resarcimiento judicial en el procedimiento, IIa. Ley, Madrid, 2006, p. 15, al manifestar que "la noción de ley de litigio resulta en el instaurar un modelo de proceso que deberá modificar el comportamiento de todos los que se nos viene llamando operadores judiciales".

63 En la Expresión de Motivos o punto L párrafo cuarto de la LEC, se deja bien claro cuando indica que "la efectiva idea de la justicia popular en el debate supone un acercamiento de la justicia al justiciable", consistente entre otras cosas "en la práctica y voluntad de la prueba, oralidad, publicidad e inmediación". En su punto X, parágrafo cuarto, insiste en que todo tipo de jueces "se constituirá por su concentración, implicación y oralidad"; y, por último, se punto XII párrafo octavo, es rotundo informando que "la Ley establece las pruebas declarativas de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hagan de ser electos. En las audiencias verbales, por la transmisión de la voz, en el ordinario, porque tiene dominio y conocimiento las fases procesionales más sobresalientes con la audiencia que presta al juez y a él mismo, ambos con la inmediata presencia de juegadores". Un resumen de la misma la expresión de Motivos, en el mismo punto XII, párrafo undécimo, afida a las conclusiones citadas a "informar por escrito", cuando el art. 415.2.1.LC nula idea de que "los jueces forman oralmente, con sus bocinas". Una duda se trata de si el resto del mencionado texto expone ideas que dentro de las conclusiones se comprenden, o si estas pertenecen a los demás apartados de acuerdo con la naturaleza y tipología determinada.

La concentración viene impuesta, entre otros preceptos, por el art. 184 LEC, por el que las visitas se celebrarán en una o más sesiones y, en caso necesario, continuar en el día y días siguientes. También se manifiesta en la medida que se regula permanentemente el aplazamiento, interrupción o suspensión de las visitas (arts. 193 y 198 LEC) y se culmina con el establecimiento de unos plazos relativamente breves para dictar sentencia desde la finalización del juicio o visita, de veinte ó diez días según se trate de juicio ordinario o verbal (arts. 434.1 y 447.1 LEC).

Por último, la publicidad viene impuesta por el art. 138.1 LEC cuando dispone que "las actuaciones de prueba, las visitas y las comparecencias han sido objeto seu oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública".

Con todo, la LFC no excluye mantener razonables excepciones cuando, en atención a la tutela pretendida y el carácter de determinados objetos del procedimiento, la vigencia de la oralidad requiera ser limitada, y hasta en ocasiones desplazarse hasta el punto de que llega a diluirse en algún caso concreto.

III. ORALIDAD GENERAL Y EXCEPCIONES EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS CHILENS

E. JUICIO COMUNES

La oralidad rige en los procesos comunes, esto es, en el llamado juicio ordinario y en el juicio verbal.

El juicio ordinario se inicia con una fase escrita de alegaciones en la que se interponen las pretensiones pero sigue con la audiencia previa y el juicio, ambas orales.

En la audiencia previa se manifiesta por primera vez la oralidad, como derivado de su regulación⁶⁴. Entre otras cosas, esta audiencia actúa de filtro de cuestiones procesales, para evitar que éstas sean detectadas en el momento de dictar sentencia. Tal circunstancia exige un escuchón previo al juez y también a las partes, para que tenga contenido material y no se convierta en mera formalidad, e impone un cambio de mentalidad y comportamiento en todos⁶⁵.

La misma oralidad impone que hagan de comparecer ante el juez las partes personalmente o representados por procurador con poder especial para realizar actos dispositivos (constitución, allanamiento y transfiguración), y asistencias técnicamente por abogado (am. 414.2 LEC). Solamente con presencia de las partes, éstas podrán intentar una solución autocompromisiva del litigio, y fijarse definitivamente los hechos controvertidos. Correspondientemente, no se

64 Así por ejemplo, dispone el art. 1291 LEC que se celebrarán en la sede del órgano que convoca el 137 LEC, que son con presencia del Juez o Magistrados que convocan, el 138 LEC, con publicidad y el art. 145 LEC impone que sea con presencia del Tribunal judicial contra fiduciario público.

65 En su punto anterior ya citados, TAPIAS IRANZOZ, José, "De la audiencia previa al juicio", en *Artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 4.º Ed., 1 a 516, recor. const. 100000, ARMENTA, M. y LEROUX, A., MELITAR, Armenta, Tucumán, 2001, p. 1309.

66 Poder ejercer que "quintuplican dos veces, de un lado, que la parte, cuando menos, comunique la posibilidad que le ofrece el proceso, y, de otro, la consecuencia del accionar a través de su representación procesal, que no seré fácil si no comprendemos la parte ni entrague el poder de representación con esa condición facultativa" (CAF Bolivia, Sala 1, 26-noviembre-2002, 2002-22396 y que es necesario recordar porque se pretenda no alcanzar acuerdo alguno) (CAF Santiago de Chile, Sala 2, 20-noviembre-2002, 2002-2602, 2002-2602-2340). Por otra parte, se ha generado un interesante debate sobre si hasta en un juicio general que incluya estos actos dispositivos no es necesario que sea dictado al juez. El primer caso prioriza inconvenientes para incluir los garantismos norma a otros y exhortaciones del representante (CAF Bolivia, Sala 1, 24-abril-2003, 2003-2000-225007). Su objetivo, el poder general que autoriza a realizar actos dispositivos, resulta más operativa para la propia estimación resulta "excesivo interno riguroso" (CAF León, Sala 2, 22-de-septiembre-2003, 2003-2003-9403). En definitiva, en los párrafos de la SMP León, Sala 2, 20-noviembre-2003, 2003-2002-111, son suficientes: "Este poder otorgado específicamente para este acto con designación de las partes, y el procedimiento para el que se ejerce...". De igual modo que indica el mencionado organismo, además, la indicación de la posibilidad de renunciar, transfigurar, allanar o proceder conforme a lo que se establece en el acuerdo o acuerdo determinado. Un gran punto genérico, además, contempla la mención "especial del mandato" 2º del artículo 72 de la norma FEA⁶⁶, es decir, no necesariamente

celebraría la audiencia previa acordada por falta de comparecencia admisible de ambas partes⁶⁵; cuando comparezca solamente el demandado y no afirme tener interés legítimo en continuar el proceso.

Se celebraría ante el juez que conozca el asunto, bajo pena de nulidad en caso contrario (art. 137.2 LEC), con el auxilio del secretario judicial, sin que en modo alguno sea delegable esta función⁶⁶. Unicamente el juez que va a conocer podrá adoptar las correspondientes decisiones que integran la audiencia: debate y resolución oral sobre presupuestos procesales (arts. 40, 43, 264, 266, 402, 403, 405, 416.1, 418, 419, 421, LEC, y 120 a 124 Ley 30/1992 LRU-PAC⁶⁷), intento conciliación (art. 414, 415 y 428.2 LEC), petición de declaraciones y precisiones sobre las alegaciones (art. 426.6 LEC), fijación de los hechos controvertidos (art. 428.1 LEC), decidir sobre la admisión de la prueba propuesta, poner de manifiesto una eventual insuficiencia probatoria o resolver el asunto directamente (arts. 429 y 428.3 LEC).

Por lo que se refiere al juzgado, también es claro que rige la oralidad tanto en su fase de práctica de pruebas como en la de conclusiones e informes, como se deriva igualmente de su regulación⁶⁸.

En el juicio verbal todavía rige con mayor intensidad la oralidad pues en el mismo hay más actos orales (la contestación a la demanda) y se fomenta la concentración (el objeto de la vista integra los aspectos básicos que en el juicio ordinario se desarrollan en dos actos)⁶⁹. Sin fin, la actividad esencial de la parte se limita prácticamente a la demanda scilicet (art. 437 LEC).

Como no podía ser de otro modo, la situación para la vista se configura para que la oralidad y la concentración que caracterizan este juicio sean efectivas. Por eso contendrá

65. La falta de presentar con poder especial impediría su tener por comparecida a la parte. Ante esta gran falta de concurrencia, interpretando el principio a la luz de la doctrina constitucional sobre el derecho a la audiencia judicial efectiva y sin indemnización entre otros, STC 79/2005, 26 marzo, y conforme con otras matizaciones recogidas, por ejemplo, la de la falta de firma del abogado, la jurisprudencia da la pronta de manifestación que se trata de un defecto formalmente, subsanable (entre otras resoluciones, STC 59/2005, Secc. 1º, 26 noviembre 2002, 2002/2209; Ileida, Secc. 2º, 20 noviembre 2001, M. 2002/111; Badajoz, Secc. 2º, 17 enero 2005, R.R. 2004/1099; Palencia, Secc. 2º, 14 abril 2005, R.R. 2005/22487). Mas importante aún, se fija a la memoria el abogado de la demanda, de la defensa y del demandante, su sobreseimiento previo, salvo que el demandado alegue interés legítimo en su continuación, si es del demandante, su sobreseimiento en el demandante en lo que resultava y procedente, art. 404.4 LEC.
66. C.M.R. 2002/2209, Vigo, «Alegaciones y audiencias previas», en proceso civil el principio, 3, año IV, tomo IV, sección IV, p. 81-82.
67. Sin perjuicio de que, en ciertos casos idénticos, fijándose en una pregunta y lo acuse su difidencial o incomprendible, la declaración de procedimiento por razón de la materia se le someterá a su comprensión, tras la formulación de la pregunta, por el juez, y en su caso, tras la formulación de la respuesta, por el demandado, en los términos del art. 407.2 LEC.
68. Así por ejemplo, se celebraría en una sesión o en varias si la exige la propia o la práctica o la excepcionalidad de la audiencia previa o la excepcionalidad de los medios (arts. 429.2 y 51 LEC); habrá de comparecer al menos una de las partes, con la posibilidad integrada. En caso contrario, quedaría el juez solo para sentencia (art. 23.2 LEC). La prueba se practicaría conforme a lo que proceda, con posibilidad en su caso de que conste en acta o efectos de apertura la discontinuidad del demandado si manda seguir.⁷⁰ Debe seguir, se platica la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamentan sus pretensiones.⁷¹ Si no hubiere concurrencia, se proponerán las próximas o sus adiciones, se practicaría segundamente. Todo ello con la posibilidad de completar pruebas con arreglo a lo dispuesto en art. 429.3 LEC. Por norma general se practicaría el informe (art. 431.1 LEC), resulta dudosa la posibilidad de realizar conclusiones e informes en la vista. Si no se opone, cuando el art. 185.1 LEC, de aplicación general, ha de autorizar que las partes puedan recurrir hechos no mencionados en el acta, en su caso, alegar sobre el resultado de la prueba. Así lo ha sostenido algún autor como J.M.B. RIBERA, «La «elección de las vías» en Abogado y Procurador en la ley de ejecución civil», *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal*, 13, junio 2003, p. 194; Martínez, en art. 193.4 LEC, no autoriza a introducir opiniones (cf. A.P. Zaragoza, Secc. 2º, 23 enero 2005, R.R. 2005/2209) ni a introducir nuevas e inextensas hipótesis (cf. A.P. Zaragoza, Secc. 2º, 23 enero 2005, R.R. 2005/2209).

advertencias sobre las consecuencias de su falta de personación y sobre las actividades previas a realizar para que en la vista se practique la prueba de modo concentrado y se puedan formular ciertas alegaciones⁷².

De modo similar a lo que ocurría en el juicio ordinario, dada la naturaleza oral del acto se requiere la asistencia al menos de alguna de las partes⁷³. Incluso no será necesario que el procurador tenga poder especial para renunciar, allanarse o transigir, salvo que decidieran realizar actos dispositivos, al no ser el art. 414.2 LEC norma de aplicación subsidiaria para el juicio verbal⁷⁴.

Por último, se acentúa la concentración porque, sin perjuicio del control de la jurisdicción y competencia de oficio (art. 440.1 LEC) y de la formulación de declinatoria por la parte en los cinco primeros días posteriores a la citación para vista (art. 64.1 LEC), ésta se celebrará en un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez desde el siguiente al de la citación. Además, se dictará sentencia en la mitad del plazo, esto es, en diez días desde la finalización de la vista (art. 447.1 LEC).

2. PROCEDIMIENTOS COJUNCTOS CON ESPECIALIDADES

En aquellos procedimientos cuyas pretensiones se circunscriban sujetas a un régimen procesal especial en algunos aspectos del proceso de declaración del que son objeto pero sin afectar al procedimiento y que por ellos pueden denominarse comunes con especialidades⁷⁵, la oralidad no queda limitada en absoluto sino que incluso ocasionalmente se potencia.

Los juicios de desahucio por falta de pago, se regulan de forma que la oralidad y concentración se acentúan pues, en caso de incomparecencia del demandado, «se declarará el desahucio sin más trámites» (art. 440.3 LEC) y habrá de dictarse sentencia en la mitad del plazo general tras darse por terminada la vista (art. 447.1 LEC).

70. Si omite, se advertirá de que: 1º No se suspenderá por incomparecencia del demandado; 2º Han de coincidir con los medios de prueba que incidan valiosos, incluyendo la previsión de que si no asistieren y se propusiere y admitiese su declaración, podrían considerarse admisibles los hechos del interrogatorio según el art. 304 LEC, 3º La consecuencia de su incomparecencia, declaración de rebeldía del demandado y desestímulo del demandante en los términos del art. 442.1 LEC, 4º Que en el plazo de tres días siguientes a la suspensión de la citación indiquen las partes que, por no poderles presentar otras distintas, han de citarlos por el informe a la vista para que declaren en calidad de partes de servicios, facilitando las datos y circunstancias para llevar a cabo la citación (art. 440.1.1 LEC, art. 5º). En la medida que sea posible la reconvenencia por tener eficacia de cosa juzgada el proceso y se den el resto de requisitos del art. 436.1 LEC, lo que está se ha de informar al actor al menos cinco días antes de la vista. Y del mismo modo habrá de proceder si pretende ejercer crédito-comprobable (art. 436.1 y 2 LEC).

71. Se celebraría si comparecen ambas partes, debidamente integrada la postulación cuando sea necesaria conforme a los arts. 23 y 31 LEC. Si solo comparece el demandante, como se debía señalar en la citación, se declararía su comparecencia y cabrá la voz del interrogatorio se consideren admisibles (arts. 442.2 y 440.1.1 LEC). Y si no comparece el demandado, continuará su manifestación inexcusable o continuará (art. 442.1 LEC) en caso contrario, se tendrá por desistido el demandante, con condición en caso de que la asistencia de las partes no海da de ser necesaria para el perfeccionamiento del procedimiento representadas por procurador. Sobre estos últimos, entienda el A.M.P. Valladolid, Secc. 1º, 13 marzo 2002, M. 2002/752, que la intervención del procurador se facilita para realizar la diligencia y es motivo de su procedimiento todos los actos procesales ordinarios, salvo los que deben realizarse personalmente por los litigantes. Y como no lleva preaviso expresa para ello, habrá de admitirse su intervención. En el mismo sentido, entre otros, el A.M.P. Valencia, Secc. 1º, 17 febrero 2003, M. 11.000/2001/14296.

72. Así, STC 59/2005, Secc. 2º, 17 noviembre 2002, R.R. 2002/11303, y un sentido similar otras resoluciones como el A.P. Zaragoza, Secc. 2º, 17 junio 2003, M. 2003/1747.

73. GRIELLES Y SÁNCHEZ, Manuel, «El apartado 25. La diversidad de procedimientos para el proceso de desahucio», en *Derecho Procesal Civil, núm. octavo*, Thomson-Asociados, 6.º año, Madrid, 2004, p. 567.

Similamente, los juicio en que se pretenda la tutela de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad también en cierta medida ven potenciada la oralidad cuando se pone a que la no competencia del demandado determinará sin más que se dicte sentencia acordando las medidas acordadas por el actor (art. 440.21 LEC).

En los juicios en que se pretenda ser puesto en la posesión los bienes adquiridos en herencia no poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario también se potencia en cierta modo la publicidad pues el auto se insertará en edictos, en el BOP y en uno de los periódicos de mayor difusión, instando a los interesados a comparecer (art. 441.1 LEC).

Y, por último, en los juicio cuya pretensión se base en el incumplimiento de un contrato inserto en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, cuando se trate de contrato de arrendamiento financiero o de venta a plazos con reserva de dominio (art. 2561.11 LEC), se potencia la concentración pues el demandado será empleado para que en el plazo de cinco días, en lugar de los diez generales, comparezca por medio de procurador y formule oposición a la demanda en los términos del art. 444.3 LEC.

3. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Aquellos procesos en los que los actos procesales -y su intensificación- son diferenciados en comparación con los procedimientos comunes y cuya adecuación se determina exclusivamente en atención de aspectos cualitativos, de modo que pueden ser calificados como especiales⁷⁵, presentan una regulación más heterogénea. Con todo, sin perjuicio de alguna excepción puntual así como de importantes matizaciones, en el mismo sigue predominando la oralidad y sus principios consecuencia.

En los procesos no disponentes, con la única excepción de los procesos sobre pretensiones de disolución forzosa de partidos políticos, sigue rigiendo la oralidad, si bien se exceptúa en cierto modo. En efecto, en los mismos se reduce en alguna medida la necesidad de su enfrentamiento directo y oral de las partes, en cuanto, además de que no son atendibles los actos de disposición de las partes, han de ejercitarse el efecto normal de la admisión de hechos y se incrementan los poderes del juez en cuanto a la aportación de los hechos y su prueba, la decisión se adoptaría con los hechos con independencia del momento en que hubieran sido introducidos (art. 752 LEC), y se podrán practicar pruebas a instancia del Ministerio Fiscal y de oficio. Asimismo, la publicidad queda limitada por cuanto el art. 754 LEC amplía el contenido del art. 138.II LEC al permitir que, cuando las circunstancias lo aconsejen, los actos y visitas se celebren a puerta cerrada y las intervenciones sean reservadas.

Asimismo la contestación a la demanda escrita, han de ser considerados otros los procesos sobre cupiedad, paternidad, filiación y matrimonio⁷⁶, pues, de acuerdo con el art. 753 LEC, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. Incluso los procesos en materia de protección de menores en los que parece que va a seguirse una tramitación

⁷⁵ ARTIBELLES en 114, p. 507.

⁷⁶ En los procesos matrimoniales, conforme a lo previsto en el art. 756.3 LEC, se exige competencia de los jueces por su número 1 de los abogados, pues de lo contrario, si no alegan las partes contraídas, se considerarán admitidos los hechos alegados por la contraparte sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. No obstante, dicha competencia tiene aplicación en los medios procurador con poder especial. De otro modo, conforme al art. 770.1 P.E.C., se admite que las pruebas que no puedan ser practicadas en la vista los se suministren plazos no superior a treinta días. Asimismo, en el procedimiento en caso de consta noción entre los conyuges, se regulan en el art. 777.4 y 514.3 LEC actuaciones para complementar documentación en diez días, el fin de que se practicaría en su caso la prueba, en tanto informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convivencia o habitanza de ambos conyugantes. Se menciona que las llevan a cabo en anteriormente convocados, cosa dispuesta y dictada los plazos establecidos en BELLÍS S.R.M.B.H.S., "El apartado 4.2 en procesos no disponentes", *Thomson Abanades*, 1.º edición, 2004, pp. 1091-1093.

escrita con estructura similar al proceso contencioso-administrativo, caracterizado básicamente por la escritura, por último finalizada con predominio de la oralidad, pues una vez recibido el expediente administrativo y formulada demanda, se inicia el juicio verbal con la única particularidad de que la contestación será también escrita.

La única y vertidinosa excepción a la oralidad la encontramos en los procesos sobre pretensiones de disolución forzosa de partidos políticos. La LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos regula un procedimiento escrito, similar al juicio de mayor cuantía de la LEC 1881. Aunque la parte empleada tiene la posibilidad de participar en la contradicción referida a la admisión de la demanda, será escrita tanto la contestación, con la que precluye con carácter general la proposición de toda prueba, como las conclusiones sobre el resultado de las pruebas⁷⁷.

Tampoco los procesos sobre división judicial de patrimonios pueden considerarse esencialmente orales por cuanto, si resulta necesario, terminarán resolviéndose por los trámites del juicio verbal (arts. 787.5 y 794.1 y 4 LEC por lo que se refiere a la división judicial del patrimonio hereditario⁷⁸; y además arts. 809.2 y 811.5 para la liquidación del régimen económico matrimonial⁷⁹).

Ni siquiera en los procesos monitornos rige verdaderamente la escritura si atendemos a que una vez formulada la oposición del demandado se iniciarán los trámites correspondientes para conocer de la misma adecuados por la cuantía o, en el caso del juicio cambiario por la materia (arts. 818.1 y 826 LEC). Salvoen los atípicos procedimientos regulados en los arts. 34 y 35 LEC la oposición se informa diádramente por la oralidad.

4. OTROS PROCEDIMIENTOS

Aunque se limita la oralidad en la medida que resulta innecesaria o innecesaria al objeto que sobre el correspondiente procedimiento, todavía puede afirmarse que la oralidad es característica general en el resto de procedimientos, particularmente los de medidas cautelares, incidentes y recursos.

⁷⁷ Una oralidad de este proceso es la que pondrá simultáneamente de proceso penal que pueda implicar la disolución del partido político no suspender la suspensión del proceso civil, por lo que, por la vía de efectuar el régimen del procedimiento penal, de algún modo se potencia la contestación.

⁷⁸ Los operadores de los partidos deberán presentarse por escrito en el plazo que determine el juez, como máximo de dos meses (art. 787.2 LEC). Tendrá que aparecer a las partes para instrucción y, en su caso oposición tantas veces como sea necesario. Una vez que se ha cumplido con la instrucción, el "tribunal" mandará comunicar al demandado y a las partes a una comparecencia que se celebrará en los términos siguientes (art. 787.3 LEC). Y si en la misma no se plantea confrontación, el tribunal, tras oír a los partes y admitir las pruebas impuestas, entenderá la constitución de la sentencia oída del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio o Tribunal (art. 787.5 LEC). Por su parte, una vez satisfecha la intervención del consejo hereditario, el juez convocará una vista a los interesados. En esta el secretario procederá a la formación del informe con los comentarios. Y si se suscita comunión, se citará a los interesados a otra vista, constituyendo su manifestación conforme a lo previsto para el juicio verbal (art. 794.3 y 4 LEC).

⁷⁹ En el proceso para la formación de instituciones, se formulará sentencia que, aunque no lo diga expresamente el art. 809.1 LEC, habrá de ser escrita. Tanto ello se citará a fois como aguz a un comparecencia para tanto, punto el secretario, se procedrá a formar institución de la comunidad matrimonial (art. 809.1 LEC). Si se suscita confrontación, se citará las instituciones a una vista que contendrán según los trámites del juicio verbal (art. 809.2 LEC). En el proceso para la liquidación del régimen matrimonial, una vez admitida la solicitud de liquidación, se citará para una comparecencia a ambos conyugantes que, si tenían un acuerdo, asistirán al nombramiento de testigos para la tramitación se sujetará por los arts. 765 y su LEC, de modo que, si no hubiere confrontación, comenzará la tramitación del procedimiento con arreglo al lo dispuesto para el juicio verbal (art. 787.5 LEC). Y en el proceso especial de liquidación del régimen de parte que se celebra en plazos establecidos, si se no obtiene acuerdo sobre la liquidación, comenzará la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal (art. 809.3 LEC).

Ciertamente el procedimiento general para las medidas cautelares responde a la oralidad. Si la decisión es con audiencia previa, se adoptaría en un procedimiento que se corresponde con el juicio verbal (art. 734.1 y 2 LEC¹); y si es sin audiencia previa, dando traslado del escrito de oposición a la solicitante, se procedería a celebrar igualmente la vista en los mismos términos (art. 741.1 LEC¹). También llegaría a la misma conclusión en la mayor parte de los procedimientos de medidas cautelares especialmente previstos para determinadas pretensiones². No obstante, en algunos supuestos concretos en que se pretende potenciar la posición del acreedor, la oralidad se mantiene para la adopción de los embargos preventivos en el procedimiento monitorio para la reclamación de gastos de comunidad (art. 21.5 LPH³) y en el juicio cambiario (arts. 821 y 823 LEC¹), en los que se adoptaría sin posibilidad de un específico trámite oral de oposición anterior ni posterior⁴.

El procedimiento contiene sobre los incidentes se caracteriza igualmente por la oralidad, con remisión a la vista de los juicios verbales⁵. Y también en los procedimientos especiales con carácter general rige la oralidad pero siempre que sea necesario de la naturaleza de su objeto. Aunque la mayor parte de los incidentes contemplan actos

⁹⁰ Pone de manifiesto el AAP Zaragoza, Socy. P. 17 julio 2003, AC. 2006-1747, que no comprendió «expresión escrita» sobre el art. 741.1, «debe ser suficiente la asistencia de las partes a través de su Procurador, conforme a lo regla general del artículo 75, sin que resulte siguiente necesario que el mismo esté en poder expreso». Por ello que el depósito de la parte se producía con la autorización fija de asistencia de la parte por su/o su procurador.

⁹¹ En los procesos sobre capacidad, art. 702.3 LEC, nomine al citado art. 734 LEC. Y con mucha claridad, para los procesos matrimoniales, el art. 271.2 y 3 LEC contempla una competencia de los jueces y, en su caso, al Ministerio Fiscal, integrada la competencia y su iniciativa acordados no fuere aprobada «se oirán las alegaciones de los concursantes y se practicaría la prueba que éstos propongan y que no sea más oportuno, así como la que el tribunal considere de oficio. Si alguna prueba no pudiera practicarse en la competencia, se señalará fecha para su práctica, en omisión de la otra, dentro de los diez días siguientes». Igualmente prevé un caso que la falta de acuerdo en los criterios propuestos por los concursantes se podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el otro que presente para fundamentar sus pretensiones sobre medidas propias de carácter patrimonial. Por su parte, para la confirmación de las medidas propuestas, el art. 272.2-21.11, prevé excepcionalmente, que «si cuando el tribunal considera que procede completar o modificar las medidas propuestas no acuerda», una competencia que se sustanciará con los diez días antes y con la prisión en el citado art. 721. Por último, para las medidas propias idóneas, el art. 273.3 LEC, prevé tanto en su propia competencia que se sustancien juntas conforme a lo que establece en el artículo 774.2, bien se señale por el demandante, no habiendo sido adoptadas con anterioridad en su libro, sino visto solamente por el actor, se sustanciará en la vista principal, salvo que ésta no pudiera celebrarse en el plazo de los diez días siguientes a la constitución en la art. 774.3.11.1. En la que se comenzará la competencia de los jueces y, en la medida lícita en mayoría de las partes se someterá por competencia para el comprador de las obligaciones derivadas de contrato inserido de competencia a plazos de bienes muebles, el art. 441.4 LEC, pone que, cuando el demandante anime su oposición a la resolución, se oirán a las partes para la vista y, si el demandante no gofie efecto a la medida sin causa justa causa o ambición, pero no formulare oposición o prescindea instar ésta en causa no comprendida en el apartado siguiente del art. mencionado, se dictará, sin más trámite, sentencia definitiva de la pretensión o no del actor. En caso contrario el demandante, además, será tenido como cumplido de brindar la quinta parte del valor de la reclamación, 20% un máximo de 100 euros.

⁹² En relación con la petición prevista en el art. 747.3 LEC, DE RECLAMACIONES, J. J., «La diligencia de cumplimiento de pago incluye por el inicio cambiario. Posibilidad de la remoción del estatuto de tributario» en el estudio jurídico, Secretaría judicial, VIII-2001, «Ministerio de Hacienda, C.I.F.M., Madrid, 2000», qd. más, considera como correcta solamente la escrita, puesto que «admitir la competencia directa entre el juez que juzga la ejecución y los jueces que juzgan la ejecución»... ademas de que la forma escrita sea el modo «normal de reflectancia» con el juzgado.

⁹³ Aunque el planteamiento de la ejecución incidental sea por escrito (art. 302.11.1 y 5), si es admitida, se dará traslado a las demás partes para constar que quedaron por escrito en plazo de cinco días. «Teniendo en cuenta que plantea el tribunal contra a las partes a la misma competencia que se celebraría conforme a lo dispuesto para las vistas de los juicios verbales» art. 303.3 LEC¹.

orales⁶, como excepción, algunos incidentes se integrarán por escrito: intervención de terceros (arts. 13.2 y 3 LEC¹); declinatoria (art. 65.1 LEC¹); y acumulación de procesos (arts. 83.1 y 94 LEC¹).

En principio, los recursos se tramitarán por escrito, salvo que excepcionalmente sea necesaria la vista⁷, básicamente para ser admisible practicar prueba, lo soliciten las partes o lo considere necesario el órgano jurisdiccional (art. 464 LEC para la apelación, 475.2 y 3 LEC para el recurso extraordinario por infracción procesal, y art. 486.2 LEC para la casación, aunque en ésta no hay práctica de prueba)⁸.

⁹⁴ Así, en el art. 14.2.114, el «tribunal o la demandante» pone la resolución sobre la intervención cuando por escrito por el demandante. Lo mismo que el art. 17.3.11.1, impone que el tribunal oírá por diez días a la otra parte. El art. 22.2.11.8, prevé que «si algunas de las partes se oye sola, la autoridad de interroga legalmente al tribunal, convocando a las partes a una competencia sobre ese mismo objeto, en el plazo de diez días». El art. 40.4.11.4, nombra el art. 12.3.1.6, de modo similar, «en caso de oposición», se sustanciará la liquidación de cláusulas y garantías por los términos establecidos para los juicios verbales en los artículos 443 y siguientes. Y el art. 40.11.4 contempla la posibilidad de suspender a petición de una parte «toda la causa», por lo que se refiere al procedimiento de trámite de testigos, como se reguló más expresamente, la de desvincular o se realice prisión o se imputación, al actor o a otros partidos. De acuerdo con el primer apartado excluye la lista (art. 41) y en su sentido la mayor parte de los autores, como otros, la L.P. 1/2003, 1/09/2003, 1/12/2003. «Pueden las partes, siempre y cuando las autoridades competentes lo autoricen, en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en la que se oiga la vista en la parte, la lista que formulan establecida. Pueden las partes, los arts. 234 y 235 LEC, regularán cada cosa en los términos de su competencia de competencia judicantes que habrá de celebrarse dentro del plazo indicado de veinte días, a la que habrán asistido las partes y sus abogados. Si en suca en lo que es competencia en el proceso con las instituciones se presenten recursos que impidan la sustanciación de alguna de las partes que impidan la sustanciación de la otra, con lo que están presentes en la causa no prevista expresamente, el art. 16.1.101.10.10, José Martí, «Introducción a la vista», en «Alegaciones y Procuradores en la Ley de la intervención civil», «actas, oídos, informes, diligencias, juzgados, I. José Martí, 2005, p. 191, consta que cabría ademas resarcir la sentencia prevista en el art. 16.1.2.11.1, estando, hasta momento de 600 años en el que la competencia legal impide «oficializar» la constitución. Y, como particularidad, de modo similarmente, se sustanciará el trámite, sin más con el Ministerio Fiscal que siempre ha de seguirlo (arts. 232.2.234.2.235.1.1.1). La vista se separará tal y como prevé el art. 230.11.4, entre otras cosas, en calidad de pleno, en escrito, con proposición y práctica de prueba, que se practiquen en el escrito aquella, en el orden que sea posible, en el plazo de quince días».

⁹⁵ Igualmente se contempla la posibilidad de que el informante de medida de ejecución centrado en presentar o alegaciones necesarias para su defensa, que no habrá efectuado por corresponder a momentos procesuales anteriores a su admisión en el «proceso», de los que se dieron traslado a las demás partes por plazo de cincuenta.

⁹⁶ López V. M. 2003. SE RUELLA, Valencia, «Artículos 182 a 189. Los actos procesales II», en «Procesos y el proceso V. 1.º edición», con: Morenés, José, «Procedimientos», Madrid, 2000, p. 18.1.2.10.2, que el procedimiento de extinción y su causa sigue la «moral del principio de oralidad», ya que se da «más aprehendido a la resolución de los mecanismos de aplicación civil», por aplicación del plazo de un mes para dictar sentencia desde que se reciban los autos.

⁹⁷ Notoriamente, en algunos casos se muestra haber posibilidad de acto síndical en el trámite de que, dado el hecho de tener conocimiento de las presunciones de admisión de los recursos de oficio o art. 495.1.1.1 o con el llamado «recurso en reiteración de la ley», que corresponde de acuerdo a BOE/2002/1530, ARBO/2003, «Vigil. Llos recursos en el proceso civil». I. Art. 1. José Martí, 2005, pp. 25.2-25.3, no es preceptivo un recurso no sujetado a un modo autorizado de impugnación de resoluciones firmes, se tramitan solamente cuando probadamente por su finalidad, ésta es, según el art. 495.1.1.1, resarcir las situaciones judiciales, figur en el fallo la doctrina o jurisprudencia para que, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, comprenda el «ordenamiento jurídico» con carácter y alcance; igualmente, por ser imprescisa la oralidad, dado que se formula tanto a determinadas resoluciones de cláusulas procesales y vinculaciones de oficio o art. 491.2.22.3.11.4, la negación se tramitará totalmente de forma escrita (art. 491.1.4), salvo que en los supuestos de auto-sentencia o dictado de prisión, proceda tramitarla escínicamente (arts. 267.2 y 267.2.1.1.1, respectivamente).

II. EN LA ESGRUAVÍA DE LA ORALIDAD: DIRECCIÓN Y FORMAMIENTO DEL DEBATE

E. LA DIRIGICIÓN DE LOS DEBATES

La consecuencia de la oralidad en el debate, el juez o presidente del tribunal dirigirán los debates, mantendrán el buen orden, exigirán que se guarde respeto y consideración a los tribunales y a quienes se hallen actuando, consagrará en el acto las faltas que se cometan (art. 186.1 E.C.) tal y como prescriben las arts. 191 a 193 LOPL, e impondrá amonestaciones en el acto o expulsiones si no obedecen a la primera advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incumr⁹⁷.

La función del juez o del presidente del tribunal será agilizar el desarrollo de las citadas, si es necesario blandiendo la atención a los abogados⁹⁸. Lógicamente, la amplitud en el ejercicio de esta atribución depende del buen hacer y de la personalidad del juez o presidente correspondiente⁹⁹. A pesar de que lo deseable que pueda resultar para el abogado al que se le halle la atención o se le retire la palabra, y hasta incluso aunque eventualmente pueda provocarse mera tensión y hasta al final inducir a algún error, lo bien eserto es que un ejercicio adecuado y ponderado por el director del debate de ríos y viente a constituir una garantía de que el debate oral se circunscriba a unos límites objetivos y temporales razonables y adecuados, a la vez que facilita el cumplimiento del principio de concentración de los actos procesales al prevenir presuntivas suspensiones de vista que no terminan en la sesión prevista.

En todo caso, parece claro que en ejercicio de esta función, ni incluso a través de la llamada de atención respecto de la falta de entendimiento o incorrecta estrategia del informe, el director del debate no deberá complementar las ausencias, faltas de conocimiento o rigor de la parte o del abogado. De ese modo, una vez más como consecuencia de la introducción de la oralidad, los abogados han de contribuir al agil y correcto desarrollo del debate, informando con concisión, claridad y estructura de modo que faciliten la comprensión del informe así como que la contraparte pueda igualmente presentarlo de tal modo. Todo ello exige, sin duda, cierto empeño en el estudio de las cuestiones procesales y sustantivas que se susciten, y un modo de expresión deudador¹⁰⁰.

⁹⁷ Quedan ya tratadas a cumplir la orden de suspensión, ver más tarde, como quedarán los señores los testigos, peritos o cualquier otro tipo, como punto o representante de tribunales en las vistas y actos judiciales de público, etc., a priori exento de la consideración, respeto y consideración debidas a los tribunales cuando se trate de su comparecer en debate. Y cuando los hechos contados en la vista revestirán la consideración de delito, sin embargo, se dirán diligencias y procederá a disposición del juez competente conforme al artículo 197.1 ECP.

⁹⁸ El mismo art. 186.2 ECP, precisa que es función del juez o presidente del tribunal agilizar el desarrollo de las citadas. “y en especial llamar la atención del Abogado de la parte que en sus intervenciones se aparten demasiado de las cuestiones que se debaten, recordándole a estos diligenciar las correspondientes, y se advierte a los segundos a dirigir su atención en el sentido que se les formule, pedir oitarles el uso de la palabra”. Como pone de manifiesto J. ANTONIO PEÑA Y LÓPEZ, *“El lenguaje de memoria”*, en Abogado y Procurador en la Ley de Enjuiciamiento Civil, recta norma, Thomson-Asociados, Ciencias Menores, 2000, p. 167, “no se trata de que el juez centre la libertad de la parte o del Abogado que così intervinieren, sino que denuncien los vertidos por los que debe desvirtuar la controversia, partiendo de la causa del conflicto y las características de la vista, de modo que no se pretenden integrar partes o circunstancias al debate suscitadas, sino que todas las quejas de la lista circulen por los miembros concursados y autoritarios, que concretan definitivamente el bien jurídico de la vista”.

⁹⁹ J. ANTONIO PEÑA, p. 166, señala con razón que “es mejor conceder un marco de libertad de argumentación, que capturar casi a priori el discurso de las partes o del Abogado, y ello siempre en beneficio del principio de concentración de consideración y defensa, que deben quedar los jueces y tribunales como instrumento de la justicia judicial exterior de estos”.

¹⁰⁰ J. ANTONIO PEÑA, p. 168.

2. DOCUMENTACIÓN DE LAS SUSPENSIONES

En comparación con el acta escrita, la documentación de los actos mediante el registro en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen supone una mayor calidad en el sistema de documentación, y permite una mejor valoración judicial así como, para las partes, potencia el ejercicio del derecho de defensa, en especial a los efectos de formular recursos¹⁰¹. Junto a ello, la documentación mediante la intervención del secretario judicial como foliatorio público supone una importante garantía de la oralidad y sus principios consecuentes¹⁰², pues impide al menos dificultad cualificadamente la realización de “visitas” y comparecencias ficticias o sin presencia judicial o de ambas partes¹⁰³.

La LOPD da preferencia a la grabación con acta abierta tada, y sólo si no es posible se realizarán sin grabación y con acta completa¹⁰⁴. Grabación que se efectuará bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado. Y las partes podrán pedir, aunque sea a su costa, copia de las grabaciones originales (arts. 147 y 167.1 ECP).

La función del secretario judicial adquiere así una importante dimensión¹⁰⁵; y al tiempo se mejora el sistema puesto que el acto del secretario, pese a toda la voluntariedad y criterio con que se pudiera redactar, no permitirá registrar todo lo acontecido¹⁰⁶.

¹⁰¹ Aunque la legislación probatoria es la que registre mejores resultados de documentación hasta el punto de que en la legislación LOPL (art. 94, 1º) y 166.1 ECP considera que la audiencia previa de datos se considera nula, no obstante haberse registrado la grabación, la LOPD, como que la grabación sea siempre, que sea acto “oficial” según quien es a quien, aunque disponiendo de las diligencias sea efectivamente judicial. Ello en virtud de que para la declaración de validez consecuencia de la grabación de documentación habrá de fundarse en indicaciones o criterios de medición, más evidentes a las que se dan en el ordenamiento de la visita probatoria.

¹⁰² DICE M. VILLALBA SÁNCHEZ-VILAS, *“Artículo 167.1. Los actos procesales”*, *“Tesis”*, *Universidad Complutense de Madrid*, 2001, p. 11-94, donde el punto de vista del secretario judicial es la posibilidad de tener en cuenta que el autor es el Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, que consta que una relación directa entre la aplicación del principio de imputación y la observancia de la grabación, de modo que tiene constancia de la presencia judicial. Y en opinión, también es garantía de la oralidad la propia evocación material de la “esta registración voluntaria”.

¹⁰³ Probablemente por tal motivo que de manifiesto 165.1, en 21 p. 15, que “Se trata de un principio regulado de acuerdo con la introducción y la oralidad. No será posible que seguidas desatenciones de los escritos sin que esto presente el piso o los límites de los plazos, impidan la oralidad y la imputación”.

¹⁰⁴ Conforme a lo visto (arts. 147.1 y 167.1 ECP), las actuaciones procesales están en vista y se cumplen en público, se documentan mediante soportes de grabación y reproducción de la imagen y del sonido. Se tiene ahora posible, solamente del sentido, en grabación, que “el abogado” le considere oportuno, se unta a los demás autoinformes en el día de los hechos apelado registrada en los soportes correspondientes. En estos casos también se efectúan montajes audiovisuales que, por tanto, se llevan a cabo a través de los medios de información audiovisual que se refieren al tiempo y al lugar, las peticiones propuestas de las partes y las respuestas que adopte el tribunal, así como las constataciones y mediciones que se consuman en soporte apto para la grabación y reproducción (artículo 146.2 ECP). Solamente si no pueden utilizarse los medios de registro por cualquier causa, la visita se documentará por medio de acta completa sellada por el Secretario judicial (art. 146.2 ECP).

¹⁰⁵ Y también la grabación simplifica el trabajo del secretario, pues su función de jefe como foliatorio público tiene de implicar una información de su función al contrario hace que disponga una especie de diccionario. Sin ir más lejos, según el art. 145.1.1.a., los secretarios dan “los certificados de autoridad” de las actuaciones procesales y, como recordaba HANACHORI, 2001, IPM, 11, *“Jueces y Tribunales”*, comentando el art. 145.1.1.b., “los secretarios dan a los jueces de liquidación y a los jueces de ejecución” (art. 145.1.1.c., *“Jueces y Tribunales”*, Madrid, 2001, p. 306). Esto es, mediante la elaboración de ciertos certificados, sobre todo en caso de absolución. Adicionalmente, en reforma operada por la LOPD 2003 en el art. 167.1 ECP introduce como causa de presión de malestar los actos procesales el que “se celebren visitas con la presencia de autoridades del secretario judicial” (art. 167.1 ECP, 2º apartado), así como “el pago de los honorarios públicos en la vista o el acto de liquidación” (art. 167.1 ECP, 3º apartado), así como “consideraciones prácticas sobre Derecho y Justicia y Ley o de la Constitución” (art. 167.1 ECP, 4º apartado), y “expresas garantías que el juez o tribunal que dirija la audiencia o la vista o el acto de liquidación realice” (art. 167.1 ECP, 5º apartado). Y en el mismo sentido, la LOPD (en 111) g. 164.

¹⁰⁶ M. VILLALBA SÁNCHEZ-VILAS, p. 26-9, 36.

En todo, las indudables ventajas de este sistema implica contrapartidas. En primer lugar, un importante coste económico no salarial para la inversión en material técnico en todos y cada uno de los salas de vistas de los órganos judiciales⁵⁸ (de todos los órganos, salvo los personales o colegados, dada la aplicación superior prevista en el art. 4 LEI), como igualmente y lo que nos es deseable, su mantenimiento en condiciones de calidad y prioridad⁵⁹. En segundo lugar, existen riesgos derivados del mal uso de la copia de la grabación, en cuanto que pueda afectar derechos fundamentales, como la intimidad del honor, o afectar a menores, etc.⁶⁰. Y, en tercer lugar, problemas y deficiencias en las grabaciones pueden generar indudables cuando la reproducción del sonido y/o imagen no se encuentren en condiciones y no se haya elaborado una completa⁶¹.

E. ALGUNAS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA ORALIDAD: EL USO DE LA LENGUA OFICIAL Y LA PERMISIBILIDAD DE INTÉRPRETES

El uso de la lengua en las actuaciones orales representa una aspecto complementario más deseable en un sistema procesal de oralidad; máxime cuando, como en España, se cuentan con lenguas propias y cooficiales en determinadas comunidades autónomas (Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana) y concurran importantes flujos de inmigración sea en su legal de personas que hablen otras lenguas sobre todo en las capitales más importantes.

En carácter general se usará el castellano en todas las actuaciones, así como también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en que radique el órgano siempre que ninguna de las partes se oponga, alejando desacostumbramiento de ella que pudiere producir indefensión (arts. 142.1 y 2 LEI), en relación con el art. 231 LOPIA. Las partes y sus representantes, como testigos y peritos, podrán utilizar la lengua cooficial en todo caso (art. 142.3 LEI)⁶². Todo ello sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia puedan determinar cuál es el alcance de la cooficialidad y así

⁵⁸ Conforme la Disposición Adicional Tercera LEI, «en el plazo de un año, a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno de la Nación y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias correspondientes, adoptarán las medidas necesarias para que los Juzgados y Tribunales dispongan de los medios materiales y de los recursos humanos precisos para la consecución de las actuaciones orales conforme a lo establecido en el artículo 17 de la presente Ley».

⁵⁹ Así, según manifestaciones del Secretario General en el momento de elaboración de la LEI, salvo citadopor el Ministro (ver, 30. p. 61), se trascienden unas manifestaciones que realizó el Sr. Gutiérrez Martínez en una reunión celebrada en Madrid en febrero de 2008, el ministro de Justicia quería incluir la ley en comunidades autónomas con competencias transferidas iba a instaurar cuatro millones de euros para equipar con medios móviles las juntas de lo en el año 2008.

⁶⁰ Una causa (Nº 31493/2004) art. 334.º, 3º apartado, en ocasiones ha pretendido que el juez entienda las grabaciones en conexión con lo mencionado en el art. 136.2 LEI. Sin embargo, ha de recordarse que este principio autoriza limitaciones a la publicidad pero no a la duración del acto. Una cosa es que, una vez desacostumbrado mediante grabación, se adapten medios específicos de protección como sería la detención de estos el acto aquél se siga en el art. 137.1 LEI.

⁶¹ Así, por ejemplo, la XAP-Soria, 10 octubre 2002, M. 2003-125, decidió la nulidad por falta de grabación de la vista por un motivo fundamental del sistema y su documentación escrita completa. Y la justicia en que el tribunal de apelación no pudo valorar el desarrollo oral de la prueba practicada en la instancia. Y similar sentencia la jurisprudencia unanime ya se había pronunciado antes y después, como la XAP-Valladolid-Soc. "9" Joséblanco 2002, II 2003-12569/Valladolid Soc., 27.11.2003, 2003-1122567/I, y Andalucía Soc., 27.12.2002, 2002-II 2003-12429/Valladolid Soc., 15.1.2004, 2003-11130/I. Por supuesto, la nulidad no siendo precedente cuando no se hayan producido diferencias entre tanto que cuando ha sido comunicado con alta certeza como punto controvertible entre la XAP-Valladolid-Soc., 27.12.2003, II 2003-1231796/Huelva Soc., 27.11.2003, II 2003-11112/I, V.A.P. Madrid, Soc., 17.12.2003, II 2004-87015, en la misma sentencia se admite la transcripción interactiva de la sentencia y es desestimada la XAP-Valladolid-Soc., 27.1.2004, II 2003-11246/I.

⁶² Una observación al 142.3 LEI: las personas hablantes de otras lenguas tienen derecho a entender y ser entendidos en la forma más sencilla.

en algún caso, a través de las leyes de normalización lingüística, se reconoce el derecho a que cuando el interesado lo solicite, los tribunales de la Comunidad Autónoma correspondiente deban dirigirse al mismo en el idioma cooficial⁶³.

Solamente serán traducidas las actuaciones cuando deban surtir efecto fuera de la Comunidad, salvo que comparten lengua propia o estando lo dispuesto las leyes o a instancia de parte se alegue indefensión (art. 142.4 LEI). Y aunque con críticas doctrinales, no se contempla la traducción de oficio por desconocimiento del propio juez o magistrados⁶⁴.

En cualquier caso, cuando no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua cooficial, alguna persona que deba prestar declaración o haya de entregárselle personalmente alguna resolución, el art. 143.3 LEI autoriza al tribunal para que hablele como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndole juramento o promesa de fiel traducción. Asimismo, si la persona fuese sordomuda y supiera leer o escribir, se emplearía o podrá valerse de la escritura; si no sabe una cosa ni otra, se nombrará intérprete adecuado (art. 143.2 LEI).

F. EXCEPCIONES A LA ORALIDAD EN LA CELEBRACIÓN DE VISTAS Y COMPARCENCIAS

Como vimos, la regla general es que en las vistas, actuaciones de prueba y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes rijan los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad (arts. 137 y 138 LEI). Básicamente, tras la relación sacaria de los antecedentes por el secretario, sustituible por acuerdo de las partes, informarán, por su orden, el actor y el demandado, o el recurrente y el recurrido, por medio de sus abogados, o las partes mismas cuando no sea preceptiva su asistencia y efectivamente no asistan. Una vez practicada la prueba, el juez o el presidente del tribunal, como director del debate conforme al art. 186 LEI, concederá la palabra de nuevo a las partes para rectificar hecho o conceptos y, en su caso, formular correspondiente alegaciones sobre el resultado de las pruebas practicadas.

No obstante las claras manifestaciones de la vigencia de la oralidad y sus principios consecuentes, pronto encontramos excepciones o, cuando menos, importantes matizaciones. Al surgir de las crisis procesales derivadas de cuestiones prejudiciales⁶⁵, lo bien visto es que cabrán alteraciones que afecten a la actividad procesal y, por esa vía, matizaciones importantes no sólo en la oralidad de los actos y en la concentración de los actos, sino incluso en la inmediación.

Ay y todo, he de sostener que la propia regulación de estas excepciones son una vía más un reflejo de un proceso oral. En otro escrito, en el que no hay alegación ni prueba, una vez iniciada la vista resulta irrelevante su interpretación⁶⁶.

⁶³ J. ANTONIO BLAZQUEZ RICARDO, "Usos lingüísticos oficiales", en: *Abogados y Procedimientos en la Ley de Espiritu Libre* (colección Thomsen-Arañuel), Caja Mayor, 2003, pp. 205-206.

⁶⁴ PTA DE LA HABLA SANTOS, Andrés, *Proyecto Proyecto Justicia Oral* (DIEZ-PP, Abre y VEGAN), Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, p. 336, subiendo un importante trámite para la oralidad del personal juzgado y puede llegar a violar el principio de unidad jurisdiccional. Pero lo que sigue autor, figura como ACTOR III, (175), p. 303, entiende que sigue practicando de oficio puesto que solamente así puede cumplir con el mandato del art. 11.3 LOPIA de no saber sobre las pretensiones que se le plantearán.

⁶⁵ Verán un panorama de las mismas en ORELLANA RAMÓN, *Mármol*, "Capítulo 27. Los otros procesos", en *Derecho Procesal Civil, normas*, Thomsen-Arañuel, Caja Mayor, 2004, pp. 925-942.

⁶⁶ XAVIER RIBA MUÑOZ, Juan, y JUAN CARLOS VILLALBA S. Jiménez, *Entendido de juicio oral* (colección Temps-Edos), 4º edición, 2004, p. 309.

卷之三

En otras excepciones a la publicidad, aunque no al deber de documentación, el art. 138.2 y 3º autoriza que las actuaciones indicadas se celebren a puerta cerrada, oídas las partes sobre ellos, cuando se estime "necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática", o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia".

三、如何评价中国古典文学批评

La L.I.E. regula detalladamente las posibilidades de nuevos sellamientos de vista. En primer lugar, prevé la fijación de día y hora mediante provisión por el "director de la vista" (art. 182 L.I.E.), sin dilaciones indebidamente largas (art. 188 LOPD). Pero a continuación, aunque con un carácter excepcional o los efectos de evitar dichas dilaciones¹⁰, con el fin de prevenir posibles sospechas suscitanse ciertas que inmediatamente al sellamiento se solle otra o con acreditación de la improbadabilidad de acudir por causa de fuerza mayor u otro motivo o de similar entidad (art. 183.1 LIEC).

Si la solicitud la formula el abogado de una de las partes, parece que el legislador se presenta como más riguroso puesto que hasta meramente que la causa sea atendible y acreditada, «sin exigir imposibilitad»¹⁰, y si vienesiera sería necesario que su participación fuera *preceptiva*¹¹. Si la causa afecta a las partes, dictaría nuevo señalamiento cuando, por no ser preceptiva la postulación, la parte no esté asistida de Abogado o representante por Procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, o, particularmente, cuandoquiera de las partes haya sido citada para responder al interrogatorio. Tratándose de testigo o perito, en caso de que el tribunal acepte la excusa, decidirá, oídas las partes en el plazo común de tres días, si dejá sin efecto el señalamiento de la vista y efectuará la misma o si citá al testigo o perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada.

Incluso, será posible obtener un efecto similar al aplazamiento por la vía de la recusación del juez o tribunal (art. 202 LOPJ), y derecho al juez ordinario y preclamando así como a la prohibición de indefensión¹⁷, consecuencia del efecto suspensivo del incidente (arts. 226 LOPJ y 199.2 LEI), que impondrá jueces señalamientos una vez conocidos.

A los efectos de evitar actividades tortuosas y dilatorias, se prevé la imposición de multa de hasta **sietecientos** euros cuando el director del debate entienda que "han procedido con dilación injustificada o sin fundamento alguno", sin perjuicio de lo que establece sobre el nuevo sellamiento tan **183.5 LUC¹¹**. Igualmente, entre otras sanciones a los abusados no implicación del codirector o director de la reunión, se contempla la imposición de multa de hasta **seiscientos** euros.

¹⁰⁷ JULIO RÍO M., *Resumen de nuevos y señalamientos de costa*, en: *Abogado o Pescador en la Frontera: 40 años sometidos a suelos extranjeros*, El Pescador, Asturias, 1990, p. 154.

¹⁰ TESIS DE GRADO EN DERECHO, 2004, p. 154.
¹¹ Fundación del Municipio fiscal, como señala ALDÍA RODRÍGUEZ ALBARRÁN, María Pilar, *Comunidades y la administración de justicia sostenible* (vol. I, Edita: 1980); que, Cf. BARDI, J. En *Nova, Valladolid*, 2000, pp. 186-187, el principio de unidad no autoriza la imputidad. Y lo mismo cabría afirmar, en mi opinión, con el principio del *lascito*.

100 PARS II, 11a, p. 362. Translation: *to see one by one, to count*. In SIS, 56, 17-19 June, 2001, 81.

¹¹¹ Véase las consideraciones y conclusiones citadas por B. AS, Sánchez, 1977, Ricardo, "Méjico nos dicta", en *Revista de Ciencias Políticas y Sociales*, 1977, 1, 1.

¹⁰² Silvia NTS, Sella 107, n.º 29 (abril de 2000, 20000-293), sobre la suspensión por tres meses en el cargo de los abogados que presentan recursos de amparo.

hago apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad si el juez cuando se le cite de nuevo tart. 292, L.14. h y hasta la posibilidad de que los testigos sean condenados por la Justicia pública".

3. Summary Statistics for Glass Thickness

Como entre el señalamiento y la vista habrá de mediarse al menos diez días tardíos, 184.2 LEC, y a ser posible se celebrará en unidad de acto, el art. 188.1 LEC, impone que la vista en el día señalado "solo podrá suspenderse" en los supuestos referidos por el mismo precepto.

A pesar del tenor aparentemente restrictivo que contiene esta norma, se sigue cosa base en otros preceptos de la norma L.E.C., en especial cuando sea consecuencia "natural" o lógica de determinadas actuaciones y igualmente reguladas en el curso del procedimiento", máxime a través de la remisión que realiza el art. 188, "Z.E.C".

上卷·政治篇

[14] B. LARROQUES, *Andrés, el autor intérprete de Ficción, como visto en su obra*, 1995, Madrid, 2001, p. 289 señala que la suspensión a diferencia de la interrupción impone que la obra no se quede en mitad.

³¹⁷ En síntesis, las nulidades de suspensión son siguientes: 1. Por impedir o dificultar la cumplimentación efectiva y oportuna de la pena privativa de libertad; 2. Por fallar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por la suspensión voluntaria del Juez o del Tribunal Judicial, o no procederse en su caso la intervención legalmente establecida en el artículo 140 del Reglamento de 1995; 3. Mando de la Corte o remisión, en su caso, en los arts. 208.8 o 212.2 (4)º); 4. Por voluntario de acuerdo los partes, alegando hasta comisión a juzgar de individual litigio que se considera tal (P.M.L.). 4. La insuficiencia absoluta de competencia de las partes, cuando existe una contradicción entre la competencia territorial del Tribunal, no habiendo precluido, cuando no sea fuerte presunción, la validez de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario o de acuerdo a la competencia de suspensión o se halle actualmente suspendida en 1º. Málaga 89.º, 8-10-2001, 14-2001-1371. 5. Por ausencia, enfermedad o incapacidad absoluta del Abogado de la parte que gocie la suspensión. Alegando cosa ajena a su mero ejercicio, a modo del testimonio simple que dice: «Estoy de vacaciones y no tengo tiempo» o que sigue voluntariamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.º En virtud de lo mismo mencionado en el punto de fondo del abogado se guarda la sentencia, da 100 días y se considera nulidad (Cádiz 26-7-2001, 26-7-2001, pp. 140-147), condición que precede la suspensión si no cumplen con la demanda de la parte que proceda. Por otra parte, conforme al art. 14.º del R.E., «... si el Tribunal, en su juicio, no procede a suspender o bien adhieren tales causas, siendo para este caso el abogado que hace tales presentaciones». Por tanto, Abogado defensor de los solitarios de cárceles de Andalucía tienen que denunciar individualmente sus causas por el Tribunal judicial en audiencias o debates, porque que procede suficientemente que

amplio del artículo de la Constitución que establece la estabilidad en el ejercicio de las funciones, cuando se pone en su contrario. En lo que respecta al establecimiento de los mandatos, admite la constitucionalidad de un plazo tiene siempre preferencia un tiempo fijo que el plazo no se celebre (SAP Laflor, Ses. 109, sentencia 2002-13162, 10.10.2001, 13.10.2001, concurso en el art. 208, I, C.I.C.). Por haberse acordado el supuesto de la estabilidad y resultar más práctico el supuesto de la vacante en el dispositivo por la I.I.C., optando los arts. 30, II, B, y 4º, 4º o 4º ter de la I.I.A.

¹¹⁶ Para la SANH Malaga, Serr., n.º 2 del 2003, al 2003 (0002), no se quiso dar respuesta a estos datos para su publicación, siendo todo lo que se pide caracterizar en acto o no afectar a elementos relevantes de la visita.

¹¹⁷ Sin querer de agotar los argumentos y en síntesis por: 1.^a) La Journalística de una revolución choca con la cultura europea; 2.^a) Los periodistas europeos no tienen la menor idea de lo que es la Revolución rusa, aunque no dejan prescindir de sus declaraciones tanto... (Continúa)

4. INTERESES DE LAS VISTAS

Iniciada la vista, podrá interrumpirse por las causas previstas en el art. 188 LEC¹¹⁸, solamente en los supuestos contemplados en el art. 193 LEC¹¹⁹.

Una vez interrumpida se restituirá al desglosar la causa que la motivó, salvo que se proceda a señalar fecha y celebración en la fecha más inmediata posible cuando la desaparición del motivo no se produzca dentro de los veinte días siguientes a la interrupción o deba ser satisfecho el juez o el número suficiente de magistrados (art. 193.3 LEC).

5. REPETICIÓN DE LAS VISTAS

A demás del supuesto previsto en el art. 193.3 LEC, la repetición de una vista, como la de un completo proceso, puede derivar de la declaración de nulidad y reavivación de actuaciones decretada conforme al régimen de nulidad previsto en los arts. 238 a 243 LOPJ¹²⁰ o 225 a 231 LEC¹²¹.

VII. EXCEPCIONES A LA ORALIDAD EN LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

La oralidad adquiere especial importancia en la fase de práctica de prueba¹²², por ello que en la misma rigen sin duda a la misma y a sus principios consecuentes¹²³. La forma de expresión de quienes intervengan en la práctica de prueba será oral, incluso cuando un perito tenga que exponer su informe concretamente al examen contradictorio de las partes; y no serán admisibles escritos preparatorios de interrogatorios de la parte¹²⁴. El inconveniente es que, como consecuencia de la oralidad y concretamente por el hecho de que las preguntas no se sometan a escrito previo, los interrogatorios resultan por si de mayor dificultad¹²⁵.

¹¹⁸ Cfr. sobre todo, VALDERRAMA, *op. cit.* 501, p. 1252, salvo que no sean trasladables como la continuación de otro escrito.

¹¹⁹ Históricamente consideró el Tribunal della Cassazione alguna excepción incidental (art. 387 LEC) que no puede desvirtuar en efecto, por ejemplo, la renuncia de interponer segun los arts. 125 a 127 LEC. 2º Su doña practicar algunas diligencias de prueba fuera de la sede del tribunal y trasladarla o certificarla en el tiempo establecido entre una y otra sede, o al apartarse los jueces o uno de ellos en momento muy próximo al acto del juicio de audiencia en el mismo debate debatir, se admitirán y no fueran posibles disponer de las pruebas admitidas, 3º No acompañar los testigos a los peritos antes judicialmente y el tribunal considera imprescindible la declaración en el informe correspondiente.

¹²⁰ Preceptos en algunos casos vienen a suponer una garantía adicional de la oralidad y sus principios consecuentes, por ejemplo, al determinar la nulidad de los actos cuando se celebren visitas sin intervención de abogado siendo su intervención preceptiva, cuando se celebren visitas sin la preceptiva intervención del secretario judicial 3º En los demás casos legítimamente establecidos.

¹²¹ Entre otras, las STS 56/2003, 24 de enero; 219/2002, 25 noviembre; y 222/2001, 7 noviembre, se refieren a "los garantismos de publicidad, oralidad, contradicción y confrontación que deben volcar a la valoración probatoria". Y en esa línea, dice la STN Andalucía, Secc. 7º, 22 abril 2003, H.R. 2003/231700, que "la práctica de la prueba en el transcurso del juicio supone un intento de predominio de la oralidad, lo que lleva necesariamente a la designación del actor".

¹²² Para un análisis de los principios del procedimiento penal, véase ORENTE Y SERRAMIO, Manuel, *Derecho Procesal Internaciona*, rec. CARMONA Y RUMO, Plano y Coma, Valencia, 2005, pp. 231-310. Un particular para los principios en el ámbito probatorio, y en particular en la prueba testimonial, precede SAMPAIO ALONSO¹²⁶, I, 51, 2º, punto 1º, *Introducción al análisis del procedimiento penal*.

¹²³ Diversos preceptos legales son claves-típicas de oralidad. Así, para la declaración de la parte, arts. 302, 303 y 308 LEC, salvo la excepción del art. 305 de peritos, art. 347 LEC y, semejante, arts. 370, 372 y 373, con la excepción del art. 301 LEC.

¹²⁴ Ademas, como indica ELIAS Y PEÑA II, 1.º Ed., "Intervención en actuaciones de práctica de prueba", en *Abogado y Procurador en la Ley 1 de Enjuiciamiento Civil*, (con otros), Ilustre Colegio, Madrid, 2003, p. 245, en el desarrollo de la práctica habrá de relacionarse tanto a posibles intervenciones acerca de su imponibilidad por parte del juez, como establecer los límites, ya sea atendiendo a los reglajes de la buena fe en el desarrollo normal del proceso ordinario o artículo 247 LEC, o bien con los límites establecidos en el artículo 302 LEC, que circunscriben el ámbito del interrogatorio de parte a los hechos sobre los que se admite esa admisión de valideremus o validificare que aprecien la claridad y la precisión exigible a las preguntas formuladas.

El juicio o la vista se caracterizan por la concentración, las pruebas se practicarán en unidad de acto (art. 290 LEC), sin perjuicio de las excepciones previstas¹²⁷. Asimismo, concurren numerosas normas tendientes a garantizar la inmediatez. Fregando su infracción incluso a la causa de nulidad (arts. 137, 193.3, 194.1 LEC)¹²⁸, todo sin perjuicio de las excepciones derivadas de la práctica mediante aislado judicial. Y, por último, la vigencia de lo anterior permite una efectiva publicidad (arts. 138.1 y 289.1 LEC)¹²⁹. La publicidad impone que los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como radio y televisión, al margen de sus límites (junto al citado art. 138 LEC), con carácter general, arts. 120.1, 204.4, 232.2 LOPJ, puedan tener acceso a las vistas¹³⁰.

No obstante la regulación general, la LEC contiene importantes excepciones a la oralidad. Al margen de que los documentos, dictámenes y otros instrumentos han de ser aportados como regla general en un momento anterior al ordinario de proposición de pruebas (art. 264 a 272 LEC), cabe que ésta se practique eventualmente sin la vigencia de la oralidad y sus principios consecuentes por razones diversas.

I. PRUEBAS ANTIDATADA

Como excepción a la concentración y en la práctica quizás también de la publicidad, se autoriza la práctica de pruebas antes del acto del juicio, de la vista y hasta incluso del inicio del proceso mismo en previsión de que fueran imposible practicarlos en el momento ordinario¹³¹. No obstante ser regla general la unidad de acto, el art. 290 LEC (también art. 429.4 LEC) inmediatamente permite su práctica con al menos cinco días de antelación al juicio o vista¹³².

¹²⁵ Dice la STC Madrid, Secc. 12, 21 febrero 2003, H.R. 2003/94129, que "en la práctica de la prueba, y para asegurar su eficiencia, se hace preciso cumplir con el principio de oralidad de introducción... una ventaja capital que es la práctica de todo la prueba en el juicio o vista, es decir, en la elección de la muestra, propulsada de manera generalizada en la ley procesal ya descrita".

¹²⁶ En prólogo de la STC Madrid, Secc. 12, 21 noviembre 2003, H.R. 2003/93028, "sin un proceso oral, tan solo el órgano judicial que ha presentado la aportación verbal del material de hecho, o de derecho", en su caso, de la ejecución de la prueba, está legitimado para dictar la sentencia o, dicho en otras palabras, la finalidad del procedimiento exige la inmediación judicial¹²⁷.

¹²⁷ Según este último precepto, "las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, es decir, publicidad y documentación científica si no se llevaren a efecto en la sede del tribunal", de modo que será admitida la presencia de público durante el juicio o la vista, sin perjuicio de las excepciones que prevalecen en el mismo art. 138.2 o 318.1.

¹²⁸ MBE II 803, 1.º Ed. BEC, p. 471. Por ello que, como ha defendido recientemente la STC, 37/2004, 19 abril, en relación con la grabación de imágenes en las vías que "no es compatible, pues, con la actual legislación reguladora del ejercicio de la libertad de información (art. 20.4.1) el establecimiento de una prohibición general concerniente a la autorización citada cosa del acceso del público de captación y difusión de imágenes a las autoridades públicas, porque la difusión de tales medios forma parte del ámbito-consecuencia que protege por el derecho a la libertad de información que no ha sido limitado con carácter general por el legislador". Esencial limitación a prohibición de tal manifestación, inexistente permitida, ha de realizarse de forma expresa en cada caso por el órgano judicial¹²⁹.

¹²⁹ Parece haberse considerado tenor similar por causa de los peritos, controlando cada uno del declarante, copiar el estudio de los mismos, como lo evidencia la necesidad de devolución de un informe (art. 203.11.4).

¹³⁰ Compárese con ORENTE Y SERRAMIO, 51, "apéndice 14", en *Plano y Coma*, 2005, 1.º Ed., Thomson Abogados, Círculo Menor, 2004, p. 354, que la "aceptabilidad" concuerda también si con la práctica en un momento anterior al inicio se traten de proveer intervenciones de corte o se prohibida un señalamiento del juicio en la fecha en que pueda ser practicada, sin riesgo de suspensión, la mayor parte de la prueba admitida.

Digitized by Armenianbooks.Ru

Constituye se admite la desclaración del Estado, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local o un otro organismo público, la práctica probatoria, además de separada y aparte de la norma escrita (arts. 315 y 383 LEC) y hasta incluso dispersa¹.

九、關於申請人申請之申請案

34. Asociación mixta judicial rompe con la unidad del acto en la práctica de las pruebas y por tanto su consecuencia. Si acordara cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos una representación convenciente que el Tribunal examine por sí mismo allí un lugar, objeto o persona (art. 353.1 EJC), lo que podría realizarse en un lugar distinto a la sede del organismo judicial, y hasta también, mediante auxilio judicial y, por tanto, evitándose la intrusión.

No obstante, aunque supone una excepción a la centralización, al mismo tiempo potencia la contaduría y la oralidad". Así como incluso la intermediación en cuenta, tratándose de órganos colegiados, habría de trasladarse todos los trámites-trámites y no simplemente el nombre.

El archivo judicial será admisible cuando el "tribunal" no considere posible o convenga hacer uso de la facultad que se le concede de desplazarse dentro de su circunscripción para practicarlas figurativamente, arts. 129.3.III y 169.2 I.II s., de modo que excluye la immedioación pues el juzgador no habrá participado directamente en la práctica de prueba.

La desclinación dominicilla, sea de la parte ian., 311 a 313.1.191, del testigo ian. 314.1.191, en su caso, del perito — posiblemente sea el ejemplo más claro de evitables

¹¹ Los sujetos sentían aprecio, no les temían, con espíritu de generosidad trataban bien con las personas que les presentaban y se mostraban por tratarse de personas de las que se admiraba la probidad, el criterio y el carácter. Los padres, particularmente los que eran maestros, enseñaron la honestidad al resto de miembros de la familia y se dieron cuenta que sus hijos heredaron esas virtudes. Los sujetos sentían orgullo en el acto de tratarlos así. Asimismo, se les respetó y trataron justamente y cumplidamente sin poder olvidar las normas que se establecieron o promulgadas a través de los años. Aunque no se permitió que los sujetos dilatasen las respuestas, 211 (14) y, finalmente, cuando se indicó el nombre de las personas parientes o familiares públicas en el cuadro para señalar cuáles habían sido autoridad, se les preguntó si «esta lista incluye individuos sin parentesco familiar determinado». El 70% respondió de que no para el grupo en general. La gente se quedó callada y luego, una persona pasó a proponer que la persona autorizada o criada, a requerimiento del tribunal, respondiera por aquella contra las buenas y las malas acciones al amparo de la ley. Algunas de las personas respondieron asintiendo, se hizo trámite de ellas a las partes, en los debates de cada situación, el tribunal disponía de recursos y se revisaba la calidad de las partes, que era situación de riesgo o no. La persona o personas que eran conocidas como padres o madres y hermanas o hermanas de los padres, eran consideradas como autoridades, la función era de autoridad y fiscalización de la persona autorizada o criada. 361 (13).

(13) Comendatuc al títol fan 21 pp. 210-214 avançem que fan 180 i 181 dient que fan 209 i 140% del mateix.

Se produciría cuando por extensión — o sea cuando el movimiento se realizara sobre una superficie de desplazamiento — existieren otras causas de analogos contradicciones y para que “se produzca” la parte en su sentido impropio — entre otras — la compenetración en la sede, pero más tarde, en las fricciones de desplazamiento de sangre, en los casos del punto 10, 100-211-114. Una vez producida la parte, se pierde la sangre, y se producen contracciones — otra causa de tensión —. En circunstancias así la fricción es impropia, y se considera “excesiva” en caso de la parte, ya los sangrados o las presiones sanguíneas excesivas crean un cuadro de lesión. Entonces, como indica PR 100-211-114, “Los sangrados en el punto de la operación ...” — o sea cuando la parte es de sangre — de donde surgen tales sangrados, la causa del sangre, o sea, este tipo de sangrado de acuerdo con el punto de vista de sangre — dice que habrá que poder decidir si se trata de sangrados propios de la cirugía, o de sangrados que se originan en el paciente, o de sangrados que se originan en el exterior. Y para ello, según el punto 100-211-114, “La prueba” — o sea, la prueba de sangre — es la mejor prueba para establecer si el paciente tiene o no sangrado. La muestra para sangre se hace con un estilete de cromo negro o de acero inoxidable. La muestra para agua se hace con un estilete de cromo negro o de acero inoxidable.

mitaciones y la oralidad y principios consecuentes. Es efecto, esencialmente, supone evadir tanto la oralidad, cuando no prefiere comparecer en el tribunal consiguiente a lo permitido que constituye o no resultante procedente teniendo en cuenta las circunstancias, (art. 1 y 2 y 311.2 LECIT), o la inadmisión, salvo que considere convenientemente posible constituirse fuera del territorio de su circunscripción sin necesidad de aviso (art. 275 LOPP) y 129.3(1) LECIT o a la concentración en quanto se produzca violencia física de la parte del organismo que convive, posible incluso con amistad al punto de vivir tanto tiempo (art. 329.41 EC), lo que implicaría en todo caso dispersión —muyante— si existen las circunstancias, además provoca suspensiones e interrupciones del juicio en la vista (art. 407.4 y 195 LEC) e incluso puede implicar excepción a la audiencia pública cuando las circunstancias lo exijan.

Si no obstante las dificultades que implica, el acto habría de ser efectivamente documentado. Siendo不可避免able la comparecencia del juzgador o en su caso del procurador, así como del secretario judicial.

¹⁰ Mordido no organismo, o que é o estudo de mundo como unidade, v. T. B. HORN & J. W. MELCHIOR, "Educação descriptiva do mundo", em *Revista Brasileira de Filosofia*, 2, 1962, p. 10-16; e R. G. DAVIS, "A world view", in *Philosophical Quarterly*, 1962, p. 1-10; A. M. SINGER, "The World View", 1961, p. 222; para considerar mundos como unidade, inclui-se também a consideração que a visão desse universo é a mesma, ou seja, a visão da totalidade, ou visão da totalidade. Nesse caso, os sistemas que se estudam devem ser respondidos por aqueles que os compõem, ou seja, os sistemas que se estudam devem ser respondidos por aqueles que os compõem. O que se pode dizer é que os sistemas que se estudam devem ser respondidos por aqueles que os compõem.

Finalmente, se realizó una evaluación de la eficiencia en el manejo de residuos en otras empresas que no pertenecen al sector agropecuario, como lo son las empresas que operan en la industria petroquímica (Petrobras, Braskem, SABESP, entre otras), la industria automotriz (Fiat, Ford, GM, entre otras) y la industria alimentaria (JBS, Marfrig, entre otras).

¹ "Labeled" goods are those which are subject to a particular tax or duty.

Le analisi di questo tipo sono state eseguite per tutti i campioni di sangue disponibili e hanno mostrato che la concentrazione di "fibrinogeno dell'urina" è più bassa rispetto a quella del sangue per tutti i campioni di sangue disponibili.

4. DILIGENCIAS FINALES

La última excepción a la concurrencia deriva de la posibilidad de practicar pruebas con posterioridad al juicio mientras todavía no se ha dictado sentencia y se den las circunstancias previstas en el art. 435 LEC¹⁴⁰.

Con posterioridad a las diligencias finales y ya dictada sentencia, el art. 460 LEC permite también la práctica de prueba en el recurso de apelación cuando se dan los tal vez supuestos que el citado precepto contiene.

FMI. A JACINTO DE CALVO LLASÁN

Sin duda la oralidad implica inconvenientes en lo presupuestario y en lo personal. Es necesario contar con sedes judiciales aptas para albergar las vistas y audiencias, e invertir en los medios e instrumentos tecnológicos necesarios para la grabación con medios adecuados de reproducción del sonido y de la imagen, con el mantenimiento que estos medios implican. De otro lado, exige una mayor preparación y experiencia para afrontar con éxito las novedades orales. Sin embargo, con todo, aporta una inadmisible mejora en la calidad de la justicia consecuencia directa de las ventajas que amplifica la inmediación, la concurrencia y la publicidad real.

Es más, los propios datos estadísticos demuestran que la oralidad ha aportado una mejora en la administración de la justicia¹⁴¹. La introducción de un nuevo proceso civil supuso, inicialmente, una ligera disminución de los asuntos¹⁴², probablemente como consecuencia de la incertidumbre que generaba la entrada en vigor la nueva LEC, así como por el aumento en la entrada de asuntos que se había producido en el año 2000, el anterior a dicha entrada en vigor. Y lo más significativo es que aumenta el nivel resolutivo¹⁴³, manteniéndose la pendencia de asuntos a pesar del aumento de registros. De otro lado, se observan reducciones significativas en la duración media de los procesos¹⁴⁴, sobre todo las tramitadas por los juzgados de primera instancia¹⁴⁵. Y si atendemos al tipo de procedimientos, los más eficientes en cuanto a brevedad son los juicios verbales, siendo que la duración media de los juicios ordinarios es superior a los verbales entre alrededor de un 50% o en el mejor de los casos.

En definitiva, la oralidad y sus principios consecuencia, no obstante sus inconvenientes y exigencias, suman sin duda un saldo favorable en la mejora del proceso civil. Y un avance tan significativo en la calidad de la justicia no crea que permita ser soslayado por el legislador, de modo que, una vez modernizado el proceso penal, en un futuro no lejano se impone afrontar también su incorporación en la futura reforma del proceso civil chileno.

140 Por no haberse podido practicar en tiempo y forma, o habiéndolo sido, no se practiquen por causas debidas a la parte, o referidas a hechos reales o de mera noticia. Asimismo, de oficio o a instancia de parte, podrán practicarse sobre hechos oportunamente alejados si los actos de prueba anteriores no hubieren resultado ejecutados por circunstancias ya desaparecidas e independientes a la voluntad y diligencia de la parte, y siempre que existan motivos fundados para estimar que permitan adaptar certeza sobre aquellos hechos.

141 Véase COMISIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL, *Evaluación de los datos estadísticos en relación con la aplicación de la Ley de Justicia Oral*, <http://www.poderjudicial.cl/jurisdiccion>, 26 de marzo de 2007.

142 El número de asuntos ingresados respectivo del 2000 se reduce el 11,5%. Asimismo, en el año 2002 los asuntos han aumentado considerablemente respecto del 2001 el 17,2% y, respecto del 2000 el 16%, superándose la pequeña disminución operada en el 2001.

143 En el 2001 y respecto del 2000, aumenta un 6,7%. Y vuelve la tasa en el 2002, que fue un 9% superior al 2001 y un 10,7% superior al 2000. De los asuntos resueltos correspondientes a la LEC¹⁴⁶ el 95,7% lo fueron en 2001 y el 94,7% en 2002. Solamente quedaron pendientes por resolverse 75.659 asuntos al 31 de diciembre de 2002.

144 Véase C. MATEURANA MIQUEL, *EL PODER JUDICIAL CHILENO. Última etapa de su evolución*, <http://www.poderjudicial.cl/jurisdiccion>, 26 de marzo de 2007.

145 De 9,76 meses de duración de los procesos en los Juzgados de Primera Instancia en el año 1999 se reduce en 2002 a 7,76 meses. Y similar es lo que sucede en los Juzgados de Primera Instancia e Instancia única, que pasa en el año 1999 de 9,71 meses a 8,68 en 2002.

Seminario Universidad Diego Portales.

La Reforma Procesal Civil. Una Mirada Crítica.

TEMA: SISTEMA PROBATORIO, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA Y FUNDAMIENTO DE LA IMPUGNACIÓN.

Cristián Maturana Miquel

Profesor de Derecho Procesal
Facultad de Derecho
Universidad de Chile

DIA: Viernes 7 de Septiembre 2006.

TIEMPO: 18:45 a 19:05.

1. INTRODUCCIÓN.

El tema “Sistema probatorio, motivación de la sentencia y fundamento de la impugnación” no sólo significa procesal, sino que político en la materia.

Para abordarlo en ese sentido con un mayor énfasis deberemos indagar:

¿Cuantos sistemas probatorios existen y que significa optar por uno y otro?

¿Cuál debería ser el rol de las partes en un proceso civil respecto de cujos derechos rige el principio de la autonomía de la voluntad?

¿Cuál es el papel del juez en el proceso oral, público, concentrado e inspirado en la inmediatez?

¿Cuál es la función del juez en una sociedad democrática?

¿Relación entre las funciones jurisdiccionales, que sólo deben corresponder al juez, con las funciones legislativas y administrativas que ejercen otros poderes del Estado?

El proceso civil presenta tráves comunes en todos los ordenamientos jurídicamente evolucionados.